



El año que termina ha sido, verdaderamente, un año con noticias para el Perú. Por primera vez, desde 1992, se vislumbran esperanzas de acabar con el fujimorismo. A pesar de la "Operación Chavín de Huántar" el gobierno no pudo remontar el desgaste que empezó en agosto de 1996. Es más, este año viejo nos deja con una pugna irresuelta por el poder. Algo así como una coyuntura congelada, en la que no sabemos quién manda en el Perú, si el poder oficial del Presidente de la República, o el oficioso del Comandante General del Ejército. Aunque sospechemos, igual que un número creciente de peruanos, que se trata del Comandante General.

Ya no parece Presidente

Aplicando el viejo dicho de que no sólo hay que serlo sino también parecerlo, podemos decir que Fujimori ya no parece Presidente del Perú. Este es el dato fundamental de la coyuntura. Quizás lo sea, de acuerdo a las formalidades de su violada Constitución, pero luego de este cálido diciembre es claro que yo no tiene el poder, si es que alguna vez lo tuvo, de Presidente de la República.

En 1996 surgió la primera oposición verdaderamente importante a la reelección de Fujimori y, por lo tanto, un cuestionamiento serio al régimen cívico-militar que ostenta el poder en el Perú. Por otra parte, el secuestro del General Robles, a principios de diciembre del año pasado, mostró con claridad las fisu-

Año NOVVEDOSO

ras existentes entre Fujimori y los militares; sin embargo, la solución de la crisis y el asunto de la embajada del Japón parecieron volver a poner a cada quien en su lugar.

Pero 1997 traería nuevas insospechadas. Por primera vez, desde el golpe de estado del cinco de abril, la gente tomó las calles para protestar contra el abuso autoritario. Esta vez fueron estudiantes y trabajadores que en junio y julio expresaron su apoyo a los defenestrados miembros del Tribunal Constitucional. Estas movilizaciones no tendrían continuidad inmediata pero sentarían una nueva tónica para el debate político en el país. A partir de ellas se empieza a tratar al gobierno fujimorista de dictadura y se multipli-

can las denuncias sobre un posible fraude que vendría preparándose para las elecciones del 2000.

Conciencia de dictadura

La conciencia de que vivimos en una dictadura nos devuelve al origen golpista de este gobierno y convierte el tema del fraude en discusión política cotidiana. Justamente porque el fraude es uno de los instrumentos naturales de un régimen autoritario para perpetuarse en el poder. No es curioso, por ello, que las denuncias de fraude, hechas con detalle en 1993 y 1995, no tuvieran eco en la opinión pública de aquel entonces y que la discusión de la posibilidad de un fraude futuro tuviera, en cambio, una gran acogida en las últimas semanas.

No debemos desmerecer, por ello, el carácter de pedagogía cívica que tuvieron las declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa, en su corto viaje al Perú, al subrayar el autoritarismo de este gobierno y su naturaleza de proyecto cívico-militar de largo plazo. Los hechos no han hecho otra cosa que ratificar sus afirmaciones.

Con estos antecedentes no sor-

prende que la oposición parlamentaria, quizás si el sector de la oposición menos dado a calificar de autoritario al gobierno, haya desatado la última crisis política, señalando, nada menos, que se cocina un fraude para el 2000. Es más, no restringe su denuncia a los muros del Palacio Legislativo, sino decide -sorprendiéndonos de nuevo- llevar su protesta a las calles y plegarse a la campaña que realizan otras organizaciones cívicas, de recojo de firmas para someter a referéndum la posibilidad de reelección de Fujimori.

¿Vacío de poder?

Pero las calles, nuevamente las calles, no estaban vacías cuando los congresistas sienten su llamado. Los alcaldes del Perú las habían llenado algunos días antes en la denominada "Marcha de los cuatro suyos". Los burgomaestres también eran víctimas del afán reeleccionista del Ing. Fujimori. Esta vez era un asunto de reparto de recursos y combate al centralismo, cosas ambas que los oponen frontalmente a la maquinaria oficialista y los llevan al lado de la oposición.

Así tenemos que congresistas, alcaldes y organizaciones cívicas se movilizaban por el país contra el gobierno cuando sucede la última

crisis del año, bien en las alturas, entre el Presidente Fujimori y el General Hermoza. ¿Cuál será la incidencia de estas movilizaciones en la crisis señalada? Difícil saberlo con señores tan aficionados al secreto para tratar asuntos que por definición deberían ser públicos, pero no caben dudas de que es una crisis que se da en el contexto de la movilización opositora. Agregan así al nerviosismo de su propio enfrentamiento el temor de quienes saben que han perdido el favor popular.

Pero lo grave de esta última crisis, en particular lo grave de que haya quedado irresuelta, es que crea un vacío de poder. Al no haber podido Fujimori defender lo poco que quedaba de poder civil en el país nos quedamos con un Presidente que desdice de su condición y cuya situación debilita gravemente sus posibilidades como actor político. Por una parte, hoy más que nunca sus afanes reeleccionistas quedan a merced, casi absoluta, de las Fuerzas Armadas. Por otra, su calidad de interlocutor civil de la oposición, en caso de una hipotética transición democrática, queda también seriamente debilitada. Por último, su calidad de líder nacional en un -ojalá que imposible- conflicto externo es también drásticamente disminuida.

¿Qué Presidente nos queda? Parece ser que un Presidente mínimo, pero no sabremos sus dimensiones exactas hasta que termine la crisis abierta con el General Hermoza.

Nuevas responsabilidades

En estas condiciones crecen las responsabilidades de la oposición. Su capacidad para conseguir las firmas necesarias para llamar a referéndum y de esta manera poner el asunto de la reelección en el centro del debate político, así como sus posibilidades de presentar una agenda municipal común para las elecciones vecinales de fin de año, son los elementos que marcarán su presencia en la escena política en 1998. Es más, desarrollando acciones en este sentido es como podrán convertir la crisis en las alturas, actualmente en curso, en una crisis política nacional, que la tome en cuenta como un actor decisivo.

Con un Presidente débil y un poder militar fuerte el asunto es de cuidado. Los únicos que pueden impedir que se aleje el camino de la transición a la democracia son los ciudadanos que ya han empezado a pisar las calles llevando sus reclamos en este año que termina.

